

Denuncias ante organismos internacionales de DD.HH. pueden servir

Presión política a ilegales

En menos de siete días han muerto seis personas civiles en Antioquia, por cuenta de grupos ilegales armados. Para el IPC, las denuncias que piensa hacer la Gobernación ante organismos internacionales puede servir como una forma de presión política.

«El panorama en cuanto a orden público en el Departamento durante la última semana ha sido nefasto, si se tiene en cuenta que han sido asesinados dos transportadores, una profesora, un campesino, una ama de casa y un niño de 12 años de edad, que nada tienen que ver con el conflicto armado que vive el país».

Así lo expresó el secretario de Gobierno de Antioquia, Jorge Mejía Martínez, al re-

ZALO

ferirse a los dos conductores muertos en el paraje El Descanso de Cocorná, en la vía Medellín-Bogotá el pasado martes.

Según el funcionario, Arnulfo Puente Estepa y Mi-

guel Antonio Tristáncito López, fueron asesinados por el Frente Noveno de las Farc, luego de que no atendieran un requerimiento del grupo ilegal armado para incinerar sus vehículos.

Al lado de estos dos crímenes, se contabilizan el de la profesora de Remedios Janeth del Socorro Vélez Galeano de 26 años y del campesino Alfonso Orrego Ibarra de 18, quienes perdieron la vida a manos de la cuadrilla Rómulo Carvalho del ELN el pasado domingo 15 de febrero.

Un día antes las Farc habían matado a Eumelia de Jesús Oquendo Zapata de 36 años y a su ahijado de 12 cuando se dirigían hacia San José de la Montaña.

A todo lo anterior hay que sumarle el apagón de cuatro días que sufrieron 11 municipios del Norte y Occidente del Departamento, gracias a un atentado terrorista perpetrado por las Farc en zona rural de Angostura.

Denuncias

Ante este panorama, el Gobierno Seccional ha repetido en numerosas ocasiones que denunciará estos crímenes atroces a varios organismos internacionales de Derechos Humanos.

Pese al escepticismo de muchos sectores que alegan que estos actos son simbólicos y no conllevan a nada, el Instituto Popular de Capacitación, IPC, asegura que sí sirven, en la medida en que

deslegitima la lucha armada.

«En últimas, las denuncias tienen es un efecto político, pues desvirtúan los postulados altruistas, revolucionarios y de cambio social por los cuales surgió el movimiento. Es decir, no son consecuentes con lo que hacen a la población civil», indicó Jesús Balbín, director del Observatorio de Derechos Humanos del IPC.

Agregó finalmente que para humanizar este conflicto donde muchos de los muertos son civiles, hay que continuar trabajando en el campo del acuerdo humanitario donde estén inmersos todos los sectores de la sociedad, para que en la guerra interna que vive Colombia no se usen métodos tan atroces donde mueran inocentes.

Repudio y dolor causó la muerte de Eumelia de Jesús Oquendo Zapata y de su ahijado de 12 años cuando se dirigían hacia San José de la Montaña. Con los de ayer, se eleva a seis el número de asesinatos de civiles en la última semana, por cuenta de los grupos armados ilegales.

AUTOPISTA

Medellín-Bogotá

Después de la muerte de los dos conductores de vehículos pesados en la Autopista Medellín-Bogotá, la IV Brigada indicó que en ese eje vial hay presencia continua del Grupo Mecanizado Juan del Corral, el Batallón de Artillería, el Plan Meteoro

(compañía especializada de seguridad de los ejes viales) y el Batallón de Contraguerrillas Granaderos. Según el informe castrense, en los cuatro grupos especiales hay más de mil efectivos que adelantan en la zona patrullajes permanentes y retenes esporádicos.